

N/REF: 0054/2021

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse, a tenor de lo dispuesto en las normas que se acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

La Orden que se informa se dicta en desarrollo del Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital regulado en la disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, a los efectos de que las entidades del Tercer Sector de Acción Social debidamente acreditadas puedan inscribirse en el citado registro, como paso previo para emitir certificaciones que acrediten que en los beneficiarios del IMV concurren las circunstancias previstas en los apartados 9 y 10 del artículo 19 del Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo.

Serán objeto de inscripción en el citado registro las entidades del Tercer Sector de Acción Social que cumplan determinados requisitos, siendo el principal objeto de la norma establecer la regulación del procedimiento de inscripción, gestión y consulta de la información que contenga el registro, dónde podrán someterse a tratamiento datos de carácter personal.

Por lo tanto, en lo que a la materia de protección de datos personales se refiere, la norma a la que debe ajustarse el proyecto de Orden sometido a consulta es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD en lo sucesivo) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo).

II

El primer aspecto que debe analizarse es el relativo al ámbito subjetivo y el ámbito material de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD aplicado al

tratamiento de datos personales derivado de la aprobación y ejecución del proyecto de la orden sometida a informe.

Conviene indicar que el RGPD extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos éstos en su artículo 4.1 como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”*

Y en cuanto al tratamiento en sí mismo considerado, el artículo 4.2 del RGPD considera como «tratamiento»: *cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;*

III

Pues bien, la citada Orden encuentra su habilitación en la disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, incorporada a través del apartado catorce del artículo 3 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, y precisamente el primer elemento que debe analizarse es quién es el principal destinatario de sus preceptos, y por tanto, cuáles y de quién van a ser los datos objeto de tratamiento, a los efectos de determinar si es de aplicación la normativa de protección de datos y en caso afirmativo, en qué medida o con qué intensidad debe aplicarse.

En el artículo 5 del proyecto de Orden, se define el “Ámbito Subjetivo” de aplicación, a cuyo tenor se indica en el apartado 1 lo siguiente:

Podrán inscribirse en el Registro todas las entidades del Tercer Sector de Acción Social que cumplan los siguientes requisitos: (...)

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social las define como:

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.

De acuerdo con lo indicado hasta ahora, podría considerarse que la información que va a ser objeto de tratamiento por parte de la administración responsable del registro corresponde a personas jurídicas y no a personas físicas, y por tanto no sería de aplicación la normativa de protección de datos.

Sin embargo, durante el articulado del proyecto de la Orden sometida a informe, constan múltiples referencias de las que se deriva directa o indirectamente al tratamiento de los datos personales de la persona que representa a las citadas entidades.

En primer lugar, y sin perjuicio de que se desconoce el formulario establecido al efecto para solicitar la inscripción en el citado registro y que es lógico considerar que se presenta por el representante legal de la entidad, para el cumplimiento de los requisitos de inscripción referidos en las letras a) a l) del artículo 5.1, se requiere de la presentación de múltiples documentos que vendrán firmados por dicho representante de la entidad.

En segundo lugar, durante el propio articulado de la orden, se encuentran múltiples referencias al representante legal, así en el artículo 6.2 referido al “Contenido de las inscripciones” y al contenido de la hoja registral y sus asientos en la letra e) consta *Datos identificativos de los representantes legales*;

Por su parte en el artículo 7 referido a la “Solicitud de Inscripción” se indica que

2. Podrán presentar la solicitud de inscripción en el Registro las personas físicas que actúen en nombre de las personas jurídicas a inscribir y que, de acuerdo con las escrituras de constitución, los estatutos o las leyes, ostenten la representación de las mismas. En este caso, deberá aportarse copia del documento público del nombramiento para el cargo. También se podrá acreditar la representación por

cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En el caso de que la solicitud la presente un o una representante que no es el o la representante legal de la sociedad, deberá aportarse una autorización específica para esta representación a favor de una persona física.

En este precepto, incluso se prevé el tratamiento de datos personales de un tercero “autorizado” por el representante legal de la entidad.

En el mismo sentido, el Artículo 8 referido a la “Documentación que debe acompañar a la solicitud de primera inscripción” se requiere en su apartado 1.a) la presentación del a) *Documento nacional de identidad de las personas representantes de la entidad y documentación acreditativa de su representación (...)* y en los sucesivos apartados se prevé la aportación de diversa documentación y se indica expresamente que ciertos documentos deben ir firmados por los representantes legales de las entidades (apartado 3) y en otros dónde no consta dicha indicación se deduce claramente.

Y finalmente, en los artículos siguientes se completa la regulación del procedimiento de inscripción dónde también será objeto de tratamiento la información del representante legal de la entidad interesada en la inscripción.

Teniendo en cuenta los preceptos y las indicaciones puestas de manifiesto, debe señalarse que el ámbito protector del RGPD también se extiende a las personas físicas que representan a las entidades, al no establecer ninguna exclusión en este sentido, pues sus datos personales deben ser tratados en las relaciones que aquellas establezcan con terceros.

En este sentido en el Informe 4/2021, se indicaba que “quedan excluidas de la aplicación de la normativa sobre datos personales las personas jurídicas, pero su ámbito protector se extiende a las personas físicas que las representan, cuyos datos personales deben ser tratados con sujeción a lo previsto en el RGPD y la LOPDGDD”.

De igual modo procede citar lo indicado en la LOPDGDD en su artículo 19 al analizar el tratamiento de los datos de personas que prestan servicios en personas jurídicas, en concreto al analizar la base jurídica que legitima el tratamiento de datos personales de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales, y que bajo el paraguas del apartado 6.1 f) del RGPD (la presunción de la concurrencia de interés legítimo) permite

el tratamiento de los datos de contacto de éstos, únicamente para localización profesional y para entablar relaciones con la persona jurídica en la que el afectado preste su servicios.

En el caso que se plantea en la Orden sometida a informe, el órgano responsable de la tramitación del procedimiento de inscripción y de la gestión del registro necesita, lógicamente, realizar el tratamiento de datos personales de los representantes de las entidades, es decir, para entablar *relaciones* (administración pública-administrado) con la persona jurídica en cuestión.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que esta presunción de interés legítimo de la LOPDGDD ex art. 19, no opera como base jurídica de legitimación de tratamiento en el supuesto que plantea la Orden sometida a informe pues el artículo 6.1 RGPD excluye expresamente la concurrencia del interés legítimo para los tratamientos que se realicen por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, sin embargo es objeto de cita en el presente informe pues como se ha indicado antes, la finalidad para la que se van a tratar los datos personales de los representantes de las entidades, coincide plenamente con las expresadas en el precepto, que no es otra que para estar identificados/localizados, y poder entablar los canales de comunicación necesarios en el procedimiento administrativo de la gestión de la tramitación del procedimiento de inscripción y de la gestión en si misma del registro una vez realizada la inscripción.

Por lo tanto, la primera conclusión que se obtiene es que, la recogida de los datos personales del representante de la entidad y su utilización durante el procedimiento de inscripción y gestión del registro se ha de considerar tratamiento de datos personales y por tanto someterse al RGPD y a la LOPDGDD.

IV

El artículo 5 del RGPD recoge los “Principios relativos al tratamiento” al disponer lo siguiente:

1. Los datos personales serán:

- a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
- b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación

científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

En cuanto al principio de licitud, debe acudirse a lo indicado en el artículo 6 del RGPD y en concreto a lo dispuesto en el apartado 1 letras c) y e) a cuyo tenor:
1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

El Considerando 45 del RGPD señala que “*Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en*

el ejercicio de poderes públicos, el tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.”

Por su parte la LOPDGDD establece en su artículo 8 bajo la denominación Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos” dispone lo siguiente:

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”

Llegados a este punto es preciso identificar al responsable del tratamiento para determinar la aplicación de la base jurídica prevista en la letra c) o la prevista en la letra e) del artículo 6.1 RGPD o ambas, es decir, procede analizar desde la perspectiva del responsable, si actúa al amparo de una obligación legal o si el tratamiento de datos es consecuencia del ejercicio de potestades públicas derivados de una competencia atribuida mediante ley.

El artículo 4.7 del RGPD considera «responsable del tratamiento» o «responsable»: *la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros;*

En el apartado dos de la disposición transitoria octava del Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital como un registro público, y se atribuye su titularidad al

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.

La citada disposición transitoria indica lo siguiente:

1. De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado para la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 19.9 y 10.

(...)

2. A los efectos de lo previsto en este real decreto-ley, son mediadores sociales del ingreso mínimo vital las entidades del Tercer Sector de acción social, conforme a la definición prevista en el artículo 2 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, debidamente registradas en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.

A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital como registro público, de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.

3. Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital todas las entidades del tercer sector de acción social que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos (...)

Por su parte en el artículo 3 del proyecto sometido a informe se indica que:

El Registro depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y es gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social a través de la persona titular de la misma.

Asimismo, el proyecto sometido a informe se dicta en virtud de la habilitación normativa otorgada por la disposición final segunda del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para el desarrollo por orden ministerial del Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital regulado en la disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a los efectos de determinar si la base jurídica del tratamiento que se deriva de la aprobación y ejecución de la Orden

sometida a informe es la prevista en el apartado c) la prevista en el apartado e) del artículo 6.1 del RGPD, o lo son ambas, procede citar lo recogido en el Informe 74/2019 dónde se destacaba la necesidad de deslindar ambos conceptos, ya que no hacerlo así implicaría confundir, en la práctica totalidad de los casos de actuación de la Administración, ambas bases jurídicas, concluyendo que

Por ello, la base jurídica prevista en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD será de aplicación en aquellos casos en los que una norma con rango de ley imponga a la Administración una obligación específica de dar, hacer o no hacer, que implique el tratamiento de datos de carácter personal, y diferente del deber jurídico genérico de la Administración de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye para servir con objetividad al interés público (artículo 103 de la Constitución).

En el Informe 5/2021 sobre el proyecto de Orden por la que se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado se indicaba que

Y el criterio que viene manteniendo reiteradamente esta Agencia, en relación con los registros administrativos, es que el tratamiento de los datos personales correspondientes se encontraría amparado por lo dispuesto en la letra e) del artículo 6.1. del RGPD: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”, siempre que se haya establecido por una norma con rango de ley, conforme a lo señalado por el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: “El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley” (Informe 92/2020, en relación con el Registro de Variedades Protegidas y el Registro de Variedades Comerciales, el Informe 128/2018 sobre el registro unificado sobre certificados y centros de formación de gases fluorados o el informe 4/2021 relativo al registro electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado).

En el presente caso, siendo el procedimiento administrativo el “conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el

cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración”, y siendo necesario dejar constancia de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo mediante el correspondiente asiento en el Registro electrónico General (artículo 16.1 de la Ley 39/2015) con el objeto de dejar reflejada, entre otras circunstancias, la fecha y hora de su presentación (artículo 16.3 de la Ley 39/2015), lo que tiene especial importancia, entre otros supuestos, a efectos del cumplimiento de los plazos notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados a instancia del interesado (artículo 21.3 de la Ley 39/2015) o para la suspensión de la ejecución de los actos administrativos recurridos (artículo 117.3 de la Ley 39/2015) y, en general, para dejar acreditada la recepción de cualquier documento que forma parte del procedimiento. Por consiguiente, el tratamiento de los datos personales de los interesados en el procedimiento y de sus representantes es necesario para dar cumplimiento a la obligación contemplada en el artículo 16.1., que exige específicamente que los asientos se hagan en el Registro electrónico general, así como para el adecuado desarrollo del procedimiento administrativo para que las Administraciones públicas puedan ejercer las potestades que tienen atribuidas, singularmente en su vertiente de garantía para el particular (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1983) encontrando su legitimación, de este modo, en el artículo 6.1 letras c) y e) del RGPD.

En el mismo sentido en el Informe 6/2021 sobre el Registro de funcionarios habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de derecho público, que además de las anteriores, añade como base jurídica la revista en el apartado b) del citado artículo 6.1, al considerar necesario el tratamiento de los datos de los funcionarios habilitados para dar cumplimiento a la relación estatutaria de éstos con la administración pública.

En el presente caso, de los preceptos indicados se deduce, en primer lugar, que la creación del registro es obligatoria para la administración competente, es decir, el legislador ha creado un registro y atribuye su titularidad a un departamento ministerial concreto para el ejercicio de competencias propias, y en segundo lugar, en cuanto a la necesidad u obligatoriedad del tratamiento de datos personales para aplicar el apartado c) del artículo 6.1 RGPD, debe indicarse que, no estamos ante una obligación, *strictu sensu*, puesto que no se impone una obligación concreta a la administración del tratamiento de datos.

De la lectura de la disposición transitoria antes citada, se extrae la voluntad de la colaboración de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en la tramitación del IMV, que es el objeto de la regulación.

En efecto, las citadas entidades podrán o no, participar en dicha gestión, y una vez presentada la solicitud de inscripción, será obligatoria su tramitación y por tanto tendrá lugar el tratamiento de datos personales de los representantes, pero dicha obligación de tratar los datos ya no descansará expresamente en una obligación legal de hacer, sino en el ejercicio del conjunto de potestades que se atribuyen al responsable del registro.

Por lo tanto, estamos ante un tratamiento de datos que resulta necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

En conclusión, el principio de licitud previsto en el artículo 5.1 a) del RGPD se ha de entender cumplido por aplicación del apartado e) del artículo 6 del RGPD en relación con el artículo 8.2 de la LOPDGDD.

V

En cuanto al cumplimiento de los restantes principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, debe hacerse especial referencia, además del principio de licitud, al de limitación de la finalidad y de minimización de datos, recogidos en las letras b) y c), que indican que los “datos personales serán:

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

Como se ha indicado antes, en la tramitación de la solicitud de inscripción en el registro se deduce que se recogen datos personales de al menos, los representantes de las entidades que pretendan inscribirse en el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, y a lo largo del articulado se indica la obligatoriedad de aportar determinada documentación dónde también serán sometidos a tratamiento dichos datos personales.

Sin embargo, para hacer un juicio de adecuación a los principios de minimización y limitación de la finalidad en relación con la información necesaria para la tramitación de la inscripción, y posterior gestión del registro

debe indicarse que son cuestiones que responden al juicio técnico del órgano responsable de la gestión del registro, y que a priori, imposibilitan un pronunciamiento expreso en este aspecto por parte de esta Agencia.

Es decir, los órganos técnicos del Ministerio competente han establecido los requisitos para la inscripción basándose, presumiblemente, en los criterios jurídicos y técnicos que son de aplicación por razón de la materia y especialidad y que esta Agencia, obviamente, desconoce.

VI

En lo que respecta a la publicidad del registro, se presume que obedece a la finalidad de dar a conocer la circunstancia de la inscripción de las entidades y así, ofrecer seguridad jurídica y certeza a los potenciales beneficiarios del IMV que acudan a estas para la tramitación de la citada ayuda. Pues bien, debe indicarse que en el artículo 4 bajo la denominación “Publicidad del Registro” se indica lo siguiente:

1. *El Registro tiene carácter público. El derecho de acceso al mismo se ejercerá de conformidad con lo establecido en el artículo 16 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el resto de normativa de aplicación.*
2. *El Registro hará efectiva la publicidad mediante certificados emitidos en formato electrónico por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del contenido de los asientos y los documentos depositados detallados a continuación:*
 - a) *Denominación de la entidad inscrita en el Registro.*
 - b) *Número nacional de inscripción.*
 - c) *Domicilio social y órganos de representación de la entidad.*
 - d) *Estatutos presentados por la entidad.*
3. *El Registro velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de las solicitudes que afecten a los datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas las resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes.*

Respecto del primer apartado, debe indicarse que resultaría necesaria la regulación específica de cómo acceder a la información obrante en el citado registro para cumplir con la publicidad del mismo y a su vez con las garantías

que se derivan del cumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD y LOPDGDD).

Es decir, si bien resultaría de aplicación, en cuanto al acceso a dicho registro el derecho previsto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) desde la perspectiva del interesado -la entidad solicitante- y con carácter general desde la perspectiva del tercero, resultaría de aplicación lo indicado en el artículo 13. d) de la citada norma que hace una remisión a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico, se echa en falta alguna indicación sobre quién, cómo y de qué manera se puede acceder a dicho registro.

Respecto del segundo apartado, se considera acorde con el principio de limitación de finalidad y minimización de datos, en la medida que los que se prevé es la expedición de un certificado que hace constar la existencia de los documentos que se indican que han de ser públicos para cumplir con la finalidad pretendida que se ha indicado antes, ofrecer seguridad y garantías de que una concreta entidad está inscrita en el Registro de Mediadores del IMV.

Respecto del tercer apartado, se propone la siguiente redacción al considerarse confusa -al referirse expresamente a resoluciones judiciales, sin aparente justificación- e incompleta -al no hacer referencia al RGPD- la que consta en el proyecto de Orden:

En la gestión del registro, el responsable velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de aquellas gestiones que impliquen tratamiento de datos personales.

En especial, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios de limitación de la finalidad, minimización de datos y exactitud, sin perjuicio del resto de principios previstos en el artículo 5 y del establecimiento de las medidas de seguridad adecuadas según lo dispuesto en el artículo 32 del citado Reglamento y del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la citada Ley Orgánica.

VII

El tercer aspecto para abordar es el relativo a la transparencia en el tratamiento de datos y el derecho a la información.

Determina el artículo 12 del RGPD en su apartado 1, lo siguiente:

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

El artículo 12 del RGPD regula de qué modo o manera se debe proporcionar la información, es decir, qué características o cualidades debe tener la información que se ofrece a los titulares de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Determina el artículo 13 del RGPD en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;*
- d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;*
- e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;*
- f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49,*

apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Como puede observarse, el precepto muestra el contenido material de la información. Es decir, qué elementos debe contener la información que se ofrezca al titular de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 11, bajo la rúbrica “Transparencia e información al afectado” determina lo siguiente:

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información

establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

- a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.*
- b) La finalidad del tratamiento.*
- c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.*

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

El artículo 11 de la LOPDGDD, establece la posibilidad de instaurar un *sistema de información por capas*, diferenciando una primera información básica y permitiendo la remisión a otro espacio informativo dónde el interesado que lo desee pueda consultar con más amplitud todo lo relativo al tratamiento de sus datos personales.

Pues bien, en el proyecto de Orden sometido a informe, se echa en falta un anexo dónde se establezca el modelo formulario de solicitud de inscripción, en el que se informe de los aspectos incluidos en el artículo 13 del RGPD antes citado, teniendo en cuenta la posibilidad que ofrece el artículo 11 de la LOPDGDD que se acaba de indicar.

VIII

Otro tratamiento que se deriva de la ejecución de la orden sometida a informe es el que realice el Mediador Social una vez inscrito y que se deriva del Capítulo III Obligaciones de los mediadores sociales del Ingreso Mínimo Vital.

En efecto, se prevé que éstos emitan certificado dónde consten los datos personales de los solicitantes del IMV y que se remitan con carácter anual a la entidad gestora del IMV el mantenimiento o modificación de los mismos (artículos 17 y 18).

Pues bien, no hay indicación alguna referida al cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos que les incumben a las entidades que se inscriban en el Registro, respecto de los datos de las personas que acudan a ellos para la tramitación de la solicitud del IMV y del tratamiento que se va a realizar derivado precisamente de la ejecución de la Orden.

Por lo tanto, sería preciso indicar en el citado Capítulo III como una obligación más a tener en cuenta por parte de las entidades, el cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD que les incumbe en el tratamiento de datos derivado de las obligaciones que se indican.